

NOMENCLATURA	: 1. [40]Sentencia
JUZGADO	: 21° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL	: C-18656-2020
CARATULADO	: ESPINOZA/FISCO-CDE

Santiago, veintiocho de Noviembre de dos mil veintidós

VISTOS:

Con fecha 21 de diciembre de 2020 comparece don Mario Armando Cortez Muñoz, abogado, cédula nacional de identidad número 6.266.674-9, y Alex Esteban Sepúlveda Rodas, habilitado de Derecho, cédula nacional de identidad número 15.360.742-7, en representación de doña **MARGARITA DE LA CRUZ ESPINOZA SILVA**, cédula nacional de identidad número 6.253.297-1, chilena, casada, pensionada, todos domiciliados para estos efectos en Carmen 602, departamento 2611, comuna de Santiago, Región Metropolitana, deduciendo demanda de indemnización de perjuicios, en juicio de hacienda, en contra del **FISCO DE CHILE**, representado legalmente por don Juan Antonio Peribonio Poduje, presidente del Consejo de Defensa del Estado, cédula nacional de identidad 6.274.313-1, con domicilio en Agustinas N° 1687, comuna de Santiago, Región Metropolitana.

Funda su acción en base al relato personal efectuado por la demandante, quien narra que en 1973, ejercía como profesora de filosofía en la Universidad de Chile sede Valparaíso y Liceos Guillermo Rivera e Instituto Comercial de Viña del Mar. Era militante del Partido Comunista y tenía responsabilidades dentro de la colectividad como “Encargada de Educación del Comité Local Sindical de Viña del Mar”. Dentro de las medidas que se tomaron como consecuencia directa del intento de Golpe de Estado conocido como el “Tancazo” el 29 de junio del 73, quedó con la responsabilidad de hacer ocupación junto a otros militantes del Consultorio



«RIT»

Foja: 1

de Atención Primaria de Salud “Cienfuegos” del Cerro Santa Inés de Viña del Mar, en caso de que se produjera un nuevo intento de Golpe y como una forma de garantizar su funcionamiento. El 11 de Septiembre se mantuvieron todo el día en el citado centro de salud en el que se presentaron para su desalojo efectivos de carabineros, militares, Infantería de Marina y Civiles con brazalete de Patria y Libertad. Todos quienes se encontraban en el lugar fueron detenidos luego de la ocupación militar del edificio. Relata que ella logró convencer a sus captores que era funcionaria y había permanecido en el lugar en el ejercicio de sus funciones laborales y fue dejada en libertad en horas de la noche, después de haber sido golpeada por varios uniformados, la pusieron boca abajo y le aplastaron la cabeza contra el suelo por un largo rato, fue agredida con culatas de fusiles, le pegaron patadas en el suelo, fue apuntada con armas de grueso calibre en la cabeza, e insultada con todo tipo de garabatos.

Sostiene que a partir del golpe de estado, fue exonerada de sus trabajos en la Universidad de Chile y el Liceo Guillermo Rivera sin explicación ni indemnización alguna. Su supervivencia quedó dependiendo de las ventas en una librería propiedad de su pareja Mario Llancaqueo. Vivía en Calle Esmeralda, Edificio de la Solidaridad, ubicado a media cuadra entre el Reloj Turri y antes de llegar a la Plaza Aníbal Pinto en el doceavo piso. El 21 Julio de 1974 se presentaron en su domicilio agentes civiles del Servicio de Inteligencia Naval que se presentaron como pertenecientes al cuartel Silva Palma y se retiraron al no encontrar a su pareja, señalaron mal el nombre y usó ese detalle para negar la presencia de la persona que buscaban. Al día siguiente los agentes regresaron esta vez acompañados por efectivos de la marina de uniforme, además de los civiles, quienes procedieron a allanar el departamento el que resultó destruido. Se le mantuvo detenida bajo la modalidad de “Ratonera” obligándola a mantener rutinas de normalidad que incluían abrir todos los días la librería que se encontraba en Calle Condell cercana a la Calle Pudeto en el Edificio Cori. El día viernes 26 logró eludir la vigilancia de sus custodios fugándose hacia la clandestinidad. El costo de esa acción fue la pérdida de la librería a puertas cerradas y el departamento completo. Refiere que tuvo que vivir



«RIT»

Foja: 1

varios años de clandestinidad, y que sus hijas nacieron en 1978 y 1980, quienes crecieron con un apellido falso.

Su segunda detención fue a mediados del mes de junio de 1984, momento en que había logrado estabilizar una fuente laboral con una nueva librería llamada “Rucarai” ubicada en calle Merced frente al Teatro “La Comedia”, local que fue allanado y destruido. Sostiene que en horas de la madrugada efectivos de Carabineros se presentaron en su domicilio aduciendo que había ocurrido “un robo” y la hacían responsable por ese robo. Por esa misma razón, y en virtud que según ellos habían encontrado material subversivo, quedó detenida toda la noche en dependencias de la Primera Comisaría de Santiago, siendo sometida a interrogatorios, vejámenes y torturas, fue golpeada ferozmente, manoseada, desnudada, amenazada de muerte en reiteradas oportunidades, se le aplicaron golpes de corriente, y fue estrangulada. Al día siguiente su hermano consiguió su liberación con el apoyo de abogados de la Vicaría de la Solidaridad.

A mediado del año 1988 viajó a Suecia con su familia retornando en noviembre de 1990, salida gatillada por una nueva arremetida de represión con seguimientos, intervenciones telefónicas, y particularmente hostigamientos a sus hijas, las que intentaron secuestrar, les embestían los autos en intentos de atropello, perdiendo nuevamente la librería y el departamento.

Concluye su narración exponiendo que las secuelas de la violencia sufrida son visibles en el deterioro de su salud: padece de temblor esencial; un mal que provoca movimientos involuntarios y que está relacionado al miedo acumulado por años de represión. Esa dolencia como otras psíquicas de “estrés postraumático”, están siendo tratadas por profesionales desde hace 20 años.

El apoderado de la demandante indica que su representada fue reconocida como víctima de violación a los Derechos Humanos, por el propio Estado chileno, encontrándose en el listado de Prisioneros Políticos y Torturados, elaborado por las Comisiones Nacionales sobre Prisión Política y Tortura, conocidas también como informes Valech I y II.



Seguidamente, transcribe algunos de los pasajes sostenidos en el Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura: La declaración de estado de guerra interna definió como enemigos a los partidarios del gobierno de la Unidad Popular y a los miembros de los partidos políticos de la izquierda chilena. Las Fuerzas Armadas y de Orden tomaron rápidamente el control del país. Personeros del gobierno derrocado, dirigentes políticos, sociales y sindicales, profesores universitarios y otras personas de relevancia pública asociadas al gobierno depuesto fueron conminados a presentarse ante las nuevas autoridades. Las escuelas, las universidades, las oficinas, las fábricas, los asentamientos de la reforma agraria y los hogares de miles de familias fueron allanados para buscar armas. Miles de personas fueron arrestadas y recluidas en recintos deportivos, oficinas públicas, regimientos, barcos, recintos policiales y otros lugares que fueron habilitados para que funcionaran como centros de detención. Las características de estas detenciones causaron un gran impacto en los afectados y en quienes presenciaron estas situaciones. El maltrato verbal a personas desarmadas fue un hecho generalizado. El despliegue desproporcionado de fuerza producía una profunda sensación de indefensión, de vulnerabilidad, desamparo e incertidumbre por tales actos. El desconcierto y el temor se amplificaban al constatar que no había instancia alguna para reclamar por el atropello y la arbitrariedad, ni siquiera para obtener la restitución o el resarcimiento de los enseres, maquinarias e instrumentos de trabajo destruidos (INFORME • COMISIÓN NACIONAL SOBRE PRISIÓN POLÍTICA Y TORTURA Pagina 582 Capitulo VIII).

El quiebre de la democracia no solamente afectó a quienes fueron detenidos y torturados por razones políticas. Afectó también a la integración social, a las posibilidades de trabajo, de participación de amplios sectores. Con la proscripción de los partidos políticos de la Unidad Popular y la persecución a numerosas organizaciones sindicales y sociales, quienes formaban parte de ellas perdieron los referentes institucionales, sociales y, en muchos casos, los referentes ideológicos que habían orientado el sentido de sus vidas en el marco de experiencias colectivas. Por otra parte, desintegradas o debilitadas sus redes de apoyo, se hizo inviable su inserción



Foja: 1

social y laboral con las condiciones anteriores y se frustraron sus expectativas de futuro. Esto marcó, para la mayoría de quienes fueron detenidos en 1973, el colapso de sus proyectos. (INFORME • COMISIÓN NACIONAL SOBRE PRISIÓN POLÍTICA Y TORTURA, Pagina 582 Capitulo VIII).

Consciente o inconscientemente, una conspiración de silencio sobre la tortura se fue extendiendo lentamente por el país. Con el pasar de los años muchos creyeron que, si bien los malos tratos habían sido comunes contra los prisioneros del régimen militar, la tortura propiamente tal no había sido tan masiva. Sin embargo, quienes habían sido torturados -las más de las veces, también en el silencio- guardaban la memoria, las marcas y las consecuencias de "tratos crueles, inhumanos y degradantes", según la Declaración Universal de Derechos Humanos, que literalmente les habían cambiado o mutilado la vida. (INFORME • COMISIÓN NACIONAL SOBRE PRISIÓN POLÍTICA Y TORTURA, pagina 9, capítulo I).

Al momento del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 regía en Chile la Constitución de 1925. Esta Carta Fundamental consagraba la división de poderes, cuya finalidad era evitar los abusos en el ejercicio de sus funciones, mediante la fiscalización recíproca de sus actuaciones y la común sujeción al ordenamiento jurídico vigente. Al producirse el derrocamiento del gobierno elegido en 1970, la Junta Militar procedió a fijar sus propias atribuciones y a subordinar el ejercicio de otros poderes del Estado a las necesidades del momento. La Junta Militar declaró que asumía el "Mando Supremo de la Nación", entendiendo por tal la concentración de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Constituyente, comprometiéndose en principio a garantizar la "plena eficacia de las atribuciones del Poder Judicial", así como a respetar la "Constitución y las leyes de la república, en la medida que la actual situación del país lo permita". La Junta Militar se declaraba investida de la misión de reparar los males atribuidos a la acción del marxismo, sindicada como contraria a los intereses nacionales, definía la situación del momento como constitutiva de un estado de guerra interna librada contra sus agentes (INFORME • COMISIÓN NACIONAL SOBRE PRISIÓN POLÍTICA Y TORTURA, pagina 169 y170, capítulo III).



A continuación del golpe militar, mediante distintos decretos leyes, se disolvieron el Congreso Nacional y el Tribunal Constitucional; se proscribió a los partidos políticos que conformaban la Unidad Popular, a la vez que se decretaba el receso de todas las colectividades restante, (si bien en 1977, producto de la creciente oposición del Partido Demócrata Cristiano al régimen militar, también serían prohibidas); y se destruyeron los registros electorales. En consonancia con las anteriores medidas orientadas a desarticular las instituciones y los procedimientos requeridos por una democracia representativa, se cesó en su cargo a las autoridades municipales vigentes, a fin de designar alcaldes llamados a secundar el trabajo de la Junta; y se decretó la calidad interina de todos los funcionarios de la Administración Pública, a excepción de los miembros del Poder Judicial y de la Contraloría. Se contó, en consecuencia, con la capacidad para purgar a voluntad los servicios estatales. En ausencia de elecciones y de plazos fijos para el ejercicio de funciones públicas de antigua representación popular, la ciudadanía perdió la facultad de elección de sus dirigentes mediante el sufragio. La Junta Militar también sometió a control las actividades de las organizaciones sindicales e intervino las universidades públicas y privadas, nombrando a altos oficiales de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, en servicio activo o en retiro, como rectores-delegados dotados con amplias atribuciones para expulsar de sus planteles a profesores y estudiantes con simpatías de izquierda, a la vez que se sometían a escrutinio los contenidos de la docencia y la programación de los canales universitarios de televisión. Se instauró una rigurosa censura a la prensa escrita, la radio y la televisión, que puso fin a cualquier medio de comunicación masiva capaz de cuestionar o fiscalizar las acciones del régimen militar, con lo cual se implantaron condiciones proclives a los abusos de poder, sea en la forma de la prisión política o la tortura. Simultáneamente, el toque de queda, vigente durante años, sustrajo del escrutinio público las acciones de los agentes del Estado ocupados de la represión, autorizados para circular libremente en las horas prohibidas. El exilio por motivos de orden político entró en acción inmediatamente, afectando a miles de personas, muchas de las cuales, antes de hacer abandono del país, sufrieron prisión política y tortura. (INFORME



Refiere que todo esto permite concluir que la prisión política y la tortura constituyeron una política de Estado del régimen militar, definida e impulsada por las autoridades políticas de la época, el que para su diseño y ejecución movilizó personal y recursos de diversos organismos públicos, y dictó decretos leyes y luego leyes que ampararon tales conductas represivas... (INFORME • COMISIÓN NACIONAL SOBRE PRISIÓN POLÍTICA Y TORTURA, pagina 192, capítulo III).

A continuación, afirma que la vida de su representada fue violentamente interrumpida, de tal forma que cambió para siempre, interrupción que se caracteriza por hechos tremendamente inhumanos, abusivos y violentos, que lo transformaron en una víctima, en un sobreviviente de los agentes del Estado al servicio de la dictadura cívico militar chilena. Pero lo más grave es que dicho cambio evidentemente no fue voluntario, ya que se debe a la interrupción que hace el Estado de Chile en su vida a través de los agentes que financio para tal efecto. En este caso se está tratando con crímenes de lesa humanidad. Asevera que el actuar de los agentes del Estado de Chile, transgredieron los límites, irrespetando los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Un Estado que se diga democrático, debe, por ser tal, indemnizar a todo ciudadano que haya sido sometido a los vejámenes físicos y morales que, con ocasión de detenciones ilegales, torturas, prisión política, persecución, y ejecuciones hayan provocado sus agentes, ya que denegar la reparación del daño moral que subsistirá en las víctimas y sus familiares, es obligarlos a seguir soportando el injusto permanentemente, por tanto, es en consideración a ello que interpone la presente demanda de indemnización de perjuicios, con la finalidad de que se indemnice a su representada por los graves daños que ha sufrido y producto de los diversos abusos de los que fue víctima, que hasta el día de hoy se traducen en dolor, impotencia y “amargura”.

En el acápite del derecho, afirma que el Estado es responsable de dichos hechos, debiendo responder íntegramente de ellos, para lo que cita normas pertinentes al caso, como lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 38 de



«RIT»

Foja: 1

la Constitución Política de la República, 1, 2, 3, 4 y 38 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración, doctrina y jurisprudencia al efecto, el señalamiento de que los hechos ilícitos de autos constituyen un crimen de lesa humanidad, y argumentaciones a fin de demostrar la imprescriptibilidad de dichos delitos, reproduciendo diversas sentencias judiciales de tribunales de primera instancia y superiores de justicia, como en los principios generales de derechos internacional de Derechos Humanos, y lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado de Chile en esta materia.

En el capítulo del daño moral proveniente de vulneración a los derechos fundamentales, luego de hacer una relación sobre su conceptualización, asevera que su representada fue víctima de detención ilegal y arbitraria, crueles torturas, apremios físicos y psicológicos crueles, inhumanos y deliberados; de violaciones a sus derechos humanos, de persecución y prisión política, todo por agentes del Estado, siendo perjudicada en sus aspectos más básicos y trascendentes, todo lo cual le generó un gran daño en su vida emocional, personal y laboral, las vejaciones de las que fue víctima han hecho que doña Margarita hasta el día de hoy, no pueda llevar una vida normal a pesar de los esfuerzos que ha realizado por ello, toda vez que sigue, sufriendo y siendo atormentada por lo vivido.

Por dichas consideraciones, pide tener por interpuesta demanda de demanda de indemnización de perjuicios, en juicio de hacienda, conforme lo establecido en el Artículo 748 del Código de Procedimiento Civil, Libro III, título XVI, en contra del **FISCO DE CHILE**, y acogerla a tramitación, condenando al demandado a pagar al demandante la suma de **\$300.000.000.-** (trescientos millones de pesos) , más intereses, reajustes legales y con costas; o, en subsidio, condenar al demandado al pago de las sumas y cantidades de dinero, que estime de justicia y equidad, debidamente reajustadas, con intereses y costas.

Con fecha 22 de marzo de 2021, consta la **notificación** de la demanda a don Juan Antonio Peribonio Poduje, en su calidad de presidente



del Consejo de Defensa del Estado, en su calidad de representante legal del demandado **FISCO DE CHILE**.

Con fecha 8 de abril de 2021, consta la **contestación** de parte del **FISCO DE CHILE**, representada por doña Ruth Israel López, quien luego de hacer un breve resumen de la demanda y las pretensiones allí consignadas, controvierte los hechos e interpone las excepciones y defensas, que a continuación se exponen.

1.- Excepción de reparación integral. Improcedencia de la indemnización alegada por haber sido ya indemnizada la demandante; fundándola en que la actora ya ha sido indemnizada, para lo cual hace una mención del contexto histórico sobre las reparaciones ya otorgadas y seguidamente sobre la complejidad reparatoria, refiriéndose a los fines del gobierno del Presidente Patricio Aylwin en lo que respecta a la justicia transicional, cuales son: “(a) el establecimiento de la verdad en lo que respecta a las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura; (b) la provisión de reparaciones para los afectados: y (c) el favorecimiento de las condiciones sociales, legales y políticas que prevean que aquellas violaciones puedan volver a producirse”.

En lo relacionado con aquel segundo objetivo, expresa que la llamada Comisión Verdad y Reconciliación, o también llamada Comisión Rettig, en su Informe Final propuso una serie de “propuestas de reparación” entre las cuales se encontraba una “pensión única de reparación para los familiares directos de las víctimas” y algunas prestaciones de salud. Dicho informe sirvió de causa y justificación al proyecto de ley que el Presidente de la República envió al Congreso y que luego derivaría en la Ley N°19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. El mensaje de dicho proyecto de ley fue claro al expresar que por él se buscaba, en términos generales, *“reparar precisamente el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas”*.

Indica que la idea de reparación de dicho texto legal, se entendió como *“un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al Estado en los hechos y circunstancias que son*



«RIT»

Foja: 1

materia de dicho Informe”; en consecuencia, señala que son así dos claros objetivos de estas normas reparatorias; la compensación de daños morales y a la mejora patrimonial.

Así las cosas, esta idea reparatoria se plasmó de manera bastante clara cuando dentro de las funciones de la Comisión se indicó que le corresponderá especialmente a ella promover “la reparación del *daño moral* de las víctimas” a que se refiere el artículo 18.

Asumida esta idea reparatoria, la ley 19.123 y, sin duda, las demás normas conexas (como la ley 19.992, referida a las víctimas de torturas) han establecido los distintos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación, exhibiendo aquella síntesis que explica cómo nuestro país ha afrontado este complejo proceso de justicia transicional.

En ese orden de ideas, menciona que se puede indicar que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones, a saber: a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero; b) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y c) Reparaciones simbólicas; asimismo, señala que, por medio de estos tres tipos de reparaciones se ha concretado el objeto de nuestro particular proceso de justicia transicional, que en lo que a este acápite respecta, busca no otra cosa que la precisa reparación moral y patrimonial de las víctimas.

Respecto de la reparación mediante transferencias directas de dinero, indica que, en términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, a diciembre de 2019, en concepto de: A) Pensiones: la suma de \$247.751.547.837.- como parte de las asignadas por la Ley 19.123 (Comisión Rettig) y de \$648.871.782.936.- como parte de las asignadas por la Ley 19.992 (Comisión Valech); B) Bonos: la suma de \$41.910.643.367.- asignada por la Ley 19.980 (Comisión Rettig) y de \$23.388.490.737.- por la ya referida Ley 19.992; D) Desahucio (Bono compensatorio): la suma de \$1.464.702.888.- asignada por medio de la Ley 19.123.-, y E) Bono extraordinario (Ley 20.874): la suma de \$23.388.490.737.-.



«RIT»

Foja: 1

.-. En consecuencia, a diciembre de 2019, el Fisco había desembolsado la suma total de \$992.084.910.400.-.

Prosigue haciendo mención que desde una perspectiva indemnizatoria, una pensión mensual también constituyen una forma de reparar un perjuicio actual y, aunque ella comporte una sucesión de pagos por la vida del beneficiario, ello no obsta a que se puedan valorizar para poder saber cuál fue su impacto compensatorio. Afirma que el cálculo de los efectos indemnizatorios de una pensión vitalicia puede realizarse simplemente sumando las cantidades pagadas a la fecha, como asimismo las mensualidades que todavía quedan por pagar.

En lo relativo a las reparaciones específicas, menciona la Ley 19.992 y sus modificaciones, que estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados” de la Nómina de personas Reconocidas como Víctimas, estableciendo un pensión anual reajutable de \$1.353.798.-, para beneficiarios menores de 70 años; de \$1.480.284 para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$1.549.422, para beneficiarios mayores de 75 años de edad. Adicionalmente, los actores recibieron en forma reciente el Aporte Único de Reparación Ley 20.874, por \$1.000.000.-. En el caso concreto la demandante ha recibido por concepto de pensión por Ley N°19.992 y N°19.234 lo siguientes montos: Margarita Espinoza Silva: \$40.998.089.-

En lo concerniente a las reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, tal como sucede en la mayoría de los procesos de justicia transicional, la reparación no se realiza sólo mediante transferencias monetarias directas sino que también a través de la concesión de diversos derechos a prestaciones. En efecto, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha señalado que el objetivo de un programa de reparación es garantizar que todas las víctimas reciban un tipo de reparación, aunque no sea necesariamente de un mismo nivel o de la misma clase. En este sentido, se concedió a los beneficiarios tanto de la Ley 19.234 como de la Ley 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y



Foja: 1

Atención Integral de Salud (PRAIS) en Servicios de Salud del país. Para acceder a estos servicios la persona debe concurrir al hospital o consultorio de salud correspondiente a su domicilio e inscribirse en la correspondiente oficina del PRAIS. Además del acceso gratuito a las prestaciones de la red asistencial, PRAIS cuenta con un equipo de salud especializado y multidisciplinario de atención exclusiva a los beneficiarios del Programa. En la actualidad cuentan con un equipo PRAIS en los 29 Servicios de Salud, compuesto en su mayoría por profesionales médicos psiquiatras, generales, de familia, psicólogos y asistentes sociales, encargados de evaluar la magnitud del daño y diseñar un plan de intervención integral, a fin de dar respuesta al requerimiento de salud de los beneficiarios.

Igualmente se incluyeron beneficios educacionales consistentes en la continuidad gratuita de estudios básicos, medios o superiores. El organismo encargado de orientar a las personas para el ejercicio de este derecho es la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, pudiendo postular a modo de ejemplo, un hijo o nieto del beneficiario, y siempre que el beneficiario no hubiese hecho uso de él, a las becas Bicentenario, Juan Gómez Millas, Nuevo Milenio o a las establecidas para estudiantes destacados que ingresan a la carrera de pedagogía, en la forma y condiciones que establece el reglamento de dichas becas. Asimismo, se concedieron beneficios en vivienda, correspondientes al acceso a subsidios de vivienda.

También se refiere a las reparaciones simbólicas, consistente en actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones, con lo que se intenta entregar una satisfacción a esas víctimas que en parte logre reparar el dolor y la tristeza y con ello reducir el daño moral.

En ese sentido, destaca la ejecución de diversas obras de reparación simbólica como las siguientes: a) La construcción del Memorial del Cementerio General en Santiago realizada en el año 1993; b) El establecimiento, mediante el Decreto N°121, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, de 10 de octubre de 2006, del Día Nacional del Detenido Desaparecido (30 de agosto de cada año); c) La construcción del



«RIT»

Foja: 1

Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, inaugurada el 11 de enero de 2010; d) El establecimiento, mediante Ley N°20.405, del Premio Nacional de los Derechos Humanos; e) La construcción de diversos memoriales y obras a lo largo de todo el país y en lugares especialmente importantes para el recuerdo de las Infracciones a los DDHH tales como Villa Grimaldi y Tocopilla, entre otras.

En el apartado sobre la identidad de causa entre lo que se pide en estos autos y las reparaciones realizadas, apunta a la jurisprudencia para ratificar su defensa acerca de la incompatibilidad de la indemnización pretendida con los beneficios de fuente estatal por los mismos hechos, reproduciendo lo señalado por la Corte Interamericana de Justicia valorando positivamente la política de reparación de violaciones de Derechos Humanos desarrollada por Chile, a tal punto que han denegado otro tipo de reparación pecuniaria luego de tomar en consideración los montos ya pagados por el Estado por conceptos de pensiones, beneficios y prestaciones públicas. En este mismo sentido, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha considerado los beneficios de establecer un sistema compensatorio único para todas las víctimas que no genere desigualdades, por lo que dar lugar nuevamente a demandas de indemnización de perjuicios, genera inevitablemente un acceso desigual a la justicia y a las reparaciones generando el efecto de debilitar la decisión política y administrativa de reparación.

Concluye señalando que estando las acciones interpuestas en autos basadas en los mismos hechos y pretendiendo indemnizar los mismos daños que han inspirado precisamente el cúmulo de acciones reparatorias, ya enunciadas, es que opone la excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizada la demandante de la presente causa.

2.- Excepción de prescripción extintiva de la acción alegada, esgrimiendo que con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo Código, solicitando que, por encontrarse prescritas, se rechace la demanda en todas sus partes. Conforme al relato efectuado por los demandantes la detención ilegal, prisión política y torturas que sufrieron ocurrieron durante la



«RIT»

Foja: 1

dictadura militar, a partir del 14 de noviembre de 1986. Es del caso que, entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las propias víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el 22 de marzo de 2021, igualmente refiere que ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332 del Código Civil. En consecuencia, opone la excepción de prescripción de 4 años establecida en el artículo 2332 del Código Civil, pidiendo que se acoja y se rechacen íntegramente la acción indemnizatoria deducida como consecuencia de ello, por encontrarse prescrita.

En subsidio, y para el caso de que el Tribunal estime que dicha norma no es aplicable al caso de marras, opone la excepción de prescripción de prescripción extintiva de 5 años contemplada en el artículo 2515 en relación con el artículo 2514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la fecha de notificación de la acción civil, transcurrió con creces el plazo pertinente.

Explica en términos generales sobre la prescripción, la cual tiene por fundamento dar fijeza y certidumbre a toda clase de derechos emanados de las relaciones sociales y de las condiciones en que se desarrolla la vida, aun cuando éstas no se ajusten a principios de estricta equidad, que hay que subordinar, como mal menor, al que resultaría de una inestabilidad indefinida. Asevera que la prescripción no exime la responsabilidad ni elimina el derecho a la indemnización, solamente ordena y coloca un necesario límite en el tiempo para que se deduzca en juicio la acción, y que en la especie, el ejercicio de la acción ha sido posible durante un número significativo de años, desde que la demandante estuvo en situación de hacerlo.

Continúa, haciendo mención de la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre la prescripción, de la que se desprende:



«RIT»

Foja: 1

1.- Que el principio general que debe regir la materia es el de la prescriptibilidad de la acción de responsabilidad civil, de modo que la imprescriptibilidad debe, como toda excepción, ser establecida expresamente y no construida por analogía o interpretación extensiva;

2.- Que los tratados internacionales invocados, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, no contienen norma alguna que declare imprescriptible la responsabilidad civil; la imprescriptibilidad que algunos de ellos establecen se refiere sólo a la responsabilidad penal.

3.- Que no existiendo una norma especial que determine qué plazo de prescripción debe aplicarse en estos casos las normas del derecho común, que en esta materia está representado por la regulación del Código Civil relativa a la responsabilidad extracontractual, y en particular por el artículo 2332 que fija un plazo de cuatro años desde la perpetración del acto; y,

4.- Que, no obstante la letra de dicho precepto, el plazo debe contarse no desde la desaparición del secuestrado (detención de la demandante en este caso), sino desde que los titulares de la acción indemnizatoria tuvieron conocimiento y contaron con la información necesaria y pertinente para hacer valer el derecho al resarcimiento del daño ante los tribunales de justicia.

Respecto del contenido patrimonial de la acción indemnizatoria, señala que la indemnización de perjuicios, cualquiera sea el origen o naturaleza de los mismos, no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago y su contenido es netamente patrimonial, por lo que la acción destinada a exigirla está expuesta a extinguirse por prescripción.

Sobre el particular, señala que, habiéndose ejercido una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad



«RIT»

Foja: 1

extracontractual del Estado, no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil.

Posteriormente, se refiere a las normas contenidas en el derecho internacional sobre la materia, haciendo referencia a ciertos instrumentos internacionales, y jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, para concluir que no habiendo norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, el Tribunal no debe apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado, debiendo rechazarse la demanda por encontrarse prescrita la acción deducida.

3.- En cuanto al daño e indemnización reclamada.

En subsidio de las defensas y excepciones planteadas, y en cuanto a la fijación de la indemnización por daño moral excesivamente solicitada, señala que no puede dejar de considerarse que el daño moral consiste en una lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades inmateriales; haciendo presente que, en términos generales, la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para ponerla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso.

Refiere que tratándose del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva, siendo improcedente invocar la capacidad económica del demandante y/o



«RIT»

Foja: 1

del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización, pues, como se ha dicho, el juez sólo está obligado a atenerse a la extensión del daño sufrido por la víctima, en la cual no tienen influencia estas capacidades, y en tal sentido, las cifras pretendidas en la demanda como compensación del daño moral, resultan excesivas teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia, y los montos promedios fijados por nuestros tribunales de justicia, que en este materia han actuado con mucha prudencia.

En subsidio, sostiene que la fijación del daño moral debe considerar todos los pagos recibidos a través de los años por los actores de parte del Estado, conforme a las leyes de reparación (19.234, 19.992, sus modificaciones y demás normativa pertinente), y que seguirán percibiendo a título de pensión, y también los beneficios extrapatrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tienen por objeto reparar el daño moral. De no accederse a esta petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces. También hace presente que para la adecuada regulación y fijación del daño moral deben considerarse como un parámetro válido los montos establecidos en las sentencias de los tribunales en esta materia, lo que implica rebajar sustancialmente los montos pecuniarios demandados.

4.- Improcedencia del pago de reajustes e intereses.

Adicional a lo alegado, esgrime que en el hipotético caso de que el tribunal decida acoger la acción de autos y condene a su representado al pago de una indemnización de perjuicios, tales reajustes e intereses solicitados por el actor, sólo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y su representada incurra en mora.

Con fecha 20 de abril de 2021, la parte demandante evacuó el trámite de la **réplica**, indicando que respecto a la reparación integral opuesta por la demandada que la normativa invocada por el Fisco, no



«RIT»

Foja: 1

contempla incompatibilidad alguna con la indemnización solicitada y no es procedente suponer que ella se dictó para reparar todo daño moral inferido a las víctimas de atentados a los Derechos Humanos, ya que se trata de formas distintas de reparación y que las asume el Estado voluntariamente, como es el caso de la legislación invocada por el demandado. Así, ello no supone una, renuncia de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia, por los medios que autoriza la ley. En cuanto a la excepción de prescripción, indica que tratándose de un delito de lesa humanidad cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas de prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraria la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrantes del ordenamiento jurídico internacional por disposición del inciso segundo del Artículo 5° de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito. Por consiguiente, cualquier diferenciación efectuada por el juez en orden a separar ambas acciones y otorgarles un tratamiento diferenciado, es discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia que se le reclama. En cuanto al monto de la indemnización y los reajustes e intereses, el monto solicitado, este es de plena justicia, toda vez que mi representado fue víctima de violación a los Derechos Humanos, siendo sometido a tortura, persecución y prisión política, todo por agentes del Estado, siendo dañado en sus aspectos más básicos y trascendentes, todo esto le genero un gran daño en su vida emocional y personal.

Con fecha 06 de mayo de 2021, la demandada evacuó el trámite de **dúplica**, insistiendo en las excepciones, alegaciones y defensas formuladas en su contestación.

Con fecha 17 de mayo de 2021, se dictó la interlocutoria de **prueba**, por el término legal, fijándose la que consta en autos.

Con fecha 20 de junio de 2022, se citó a las partes a **oír sentencia**.



«RIT»

Foja: 1

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, con fecha 21 de diciembre de 2020, comparece don Mario Armando Cortez Muñoz, abogado y don Alex Esteban Sepúlveda Rodas, habilitado de Derecho, en representación de doña **MARGARITA DE LA CRUZ ESPINOZA SILVA**, todos ya individualizados, deduciendo demanda de indemnización de perjuicios, en juicio de hacienda, en contra del **FISCO DE CHILE**, representado legalmente por don Juan Antonio Peribonio Poduje, ambos ya individualizados, acogerla a tramitación, condenando al demandado a pagar al demandante la suma de **\$300.000.000.-**, más intereses, reajustes legales y con costas, o, en subsidio, condenar al demandado al pago de las sumas y cantidades de dinero, que estime de justicia y equidad, debidamente reajustadas, con intereses y costas.

Funda su pretensión en los argumentos ya reseñados en la parte expositiva de esta sentencia, y que en esta parte, para evitar reiteraciones, se dan por reproducidos.

SEGUNDO.- Que, con fecha 08 de abril de 2021, el **FISCO DE CHILE** contestó la demanda, solicitando su rechazo, con costas; o, en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido, fundándose para ello en los antecedentes de hecho y derecho que ya han sido reseñados en la parte expositiva de la sentencia, los cuales se dan por enteramente reproducidos en este motivo.

TERCERO.- Que, con fecha 28 de abril de 2021, se tuvo por evacuado el trámite de la réplica de la demandante, en la que se reiteraron los argumentos de la demanda y se solicitó el rechazo de las excepciones opuestas por la demandada, fundándose en los argumentos de hechos y derecho que ya han sido reseñados en la parte expositiva del fallo, los que se dan por enteramente reproducidos en este considerando.

CUARTO.- Que, con fecha 06 de mayo de 2021, se evacuó el trámite de la réplica, en la que se reiteraron los argumentos de la contestación.



«RIT»

Foja: 1

QUINTO.- Que, para acreditar los fundamentos de su pretensión, la parte demandante se valió de la siguiente prueba instrumental:

1.- Copia simple de extracto de “Norma Técnica del Ministerio de Salud de Chile, para la atención en Salud de Personas Afectadas por la Represión Política Ejercida por el Estado en el Periodo 1973-1990”;

2.- Copia simple de documento titulado “Características del daño y trauma en afectados directos de violaciones a los Derechos Humanos”, emitido por Psicólogo Freddy Silva G, Coordinador del Equipo PRAIS;

3.- Copia simple de documento titulado “Transgeneracionalidad del daño”, confeccionado por Psicólogo Freddy Silva G, Coordinador Especializado del Equipo PRAIS;

4.- Copia simple de documento titulado “Consecuencias de la Tortura en la Salud de la Población Chilena”, Gobierno de Chile, del Ministerio de Salud;

5.- Copia simple de documento denominado “Informe en términos generales sobre las secuelas dejadas en el plano de la salud mental relacionadas con las violaciones a los Derechos Humanos, cometidas durante la dictadura militar”, emitido por Paula Hinojosa Oliveros, Psicóloga de PRAIS;

6.- Copia simple de Artículo denominado “Represión Política, Daño Transgeneracional y el Rol del Estado como Agente Reparador”, extendido por Psicólogo Clínico del programa PRAIS de la Araucanía Norte, don Sergio Beltran P.;

7.- Copia simple de instrumento denominado “Algunos problemas de salud mental detectados por equipo psicológico-psiquiátrico”, realizado por la Vicaria de la Solidaridad.

8.- Copia simple de instrumento denominado “Algunos Factores de Daño a la Salud Mental”, realizado por la Vicaria de la Solidaridad;

9.- Copia documento titulado “I. Tortura, tratos crueles e inhumanos en 1980 y su impacto psicológico; II. Las prácticas de amedrentamiento a la



«RIT»

Foja: 1

población, relegaciones y su impacto psicológico en las personas y en la familia”, entre otros;

10.- Copia de informe denominado: “Trabajo Social, una experiencia solidaria en la promoción y defensa de los Derechos Humanos”, realizado por Victoria Baeza Fernández, Norma Muñoz Peñailillo, María Luisa Sepúlveda Edwards, Ximena Taibo Grossi, Asistentes Sociales del Departamento Jurídico de la Vicaria de la Solidaridad;

11.- Copia instrumento denominado “Salud Mental y Violaciones a los Derechos Humanos”, por el equipo de salud de la Vicaria de la Solidaridad, integrado por los Doctores. Andrés Donoso, Guillermo Hernández, Ramiro Olivares, el Psicólogo Sergio Lucero, y la auxiliar de enfermería Janet Ulloa;

12.- Copia simple informe titulado “Efectos con la salud física y mental en la población a consecuencia de la represión en las protestas y otras acciones masivas, por La Vicaria de la Solidaridad;

13.- Copia simple de instrumento titulado “Estudio de salud mental en presos políticos en periodo de transición a la democracia”, por Neuropsiquiatra Jacobo Riffo y Psicóloga Viviane Freraut del equipo de salud mental del DITT (Detención, Investigación y Tratamiento de la Tortura) y CODEPU (Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo);

14.- Copia simple de instrumento titulado “Significado psicosocial de la tortura, ética y reparación”, realizado por doña Elisa Neumann, psicóloga y por don Rodrigo Erazo, psiquiatra, del equipo médico psiquiátrico de FASIC;

15.- Copia simple de monografía titulada “Lo Igual y lo Distinto en los Problemas Psicopatológicos Ligados a la Represión Política”, realizada por Psiquiatra Mario Vidal, Psiquiatra Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS);



«RIT»

Foja: 1

16.- Copia simple de documento titulado “Trauma Político y Memoria Social” realizado por E. Lira y M. Castillo, del Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS);

17.- Copia simple de documento titulado “Tortura y Trauma Psicosocial”, realizada por el Médico Psiquiatra Carlos Madariaga;

18.- Copia simple de documento titulado “Consecuencias Psicosociales de la Represión Política”, realizado por la Psicóloga Elizabeth Lira;

19.- Copia simple de monografía titulada “Aspectos Psicosociales de la Represión Durante la Dictadura”, realizado por María Teresa Almarza, Psicóloga del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS);

20.- Copia simple de monografía titulada “Tortura y trauma: El viejo dilema de las taxonomías psiquiátricas”, realizada por el Psiquiatra Carlos Madariaga, de CINTRAS.

21.- Copia simple de documento titulado “Las peores cicatrices no siempre son físicas: la tortura psicológica”, realizado por el doctor Hernán Reyes, de la división de asistencia de la Cruz Roja Internacional.

22.- Copia simple de “Extracto de la Nómina de personas reconocidas como víctimas en etapa de reconsideración por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Comisión Valech)”, sin fecha, en el que se expresa: “[...] 340. Espinoza Silva, Margarita de La Cruz RUN: 6.253.297-1 [...]”

23.- Copia simple de Capítulo III, del Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, titulado: Contexto. “Con este capítulo la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura aspira a describir un contexto básico para la mejor comprensión de la represión política verificada durante el régimen militar”;

24.- Copia simple capítulo V del Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, titulado: Métodos de tortura: definiciones y testimonios;



«RIT»

Foja: 1

25.- Copia capítulo VIII del Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, titulado: Consecuencias de la prisión política y la tortura;

26.- Copia de Informes denominados: -La Tortura Modelo de Intervención. -La Tortura Un Problema Médico. Ambos emitidos por Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC);

27.- Copia simple de Informe denominado “Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos”;

28.- Copia de informe psicológico de la demandante doña Margarita de la Cruz Espinoza Silva, realizado por la Psicóloga, Carolina Canales Cortés.

SEXTO.- Que, por su parte, el Fisco de Chile, en el primer otrosí de su libelo de contestación, solicitó se oficie:

.- Al Instituto de Previsión Social (IPS) a fin de que informe sobre todos los beneficios reparatorios del Estado y los montos totales que ha obtenido doña Sra. Margarita Espinoza Silva, especialmente en relación a las leyes 19.123, 19.234, 19.992, 20.874, y demás pertinentes.

Petición a la cual accedió el Tribunal según resolución de fecha 19 de abril de 2021, acompañándose al Tribunal los siguientes antecedentes:

.- Con fecha 17 de enero de 2021, folio 25, se acompañó por el demandado oficio ORD DSGT N°4792/1036, emitido por el Instituto de Previsión Social, de fecha 06 de abril de 2021, por el cual se informa un detalle de los beneficios otorgados: a doña Margarita Espinoza Silva por una suma total a la fecha de emisión de \$40.998.089, y una Pensión actual PNC por la suma de \$187.970.

SÉPTIMO.- Que, la demandante Margarita Espinoza Silva, ha demandado al Fisco de Chile invocando su calidad de víctima de violaciones a los derechos humanos, relatando que fue detenida ilegalmente, golpeada y torturada por agentes del Estado, el día 11 de septiembre de 1973, el día 22 de julio de 1974 y finalmente a mediados del mes de junio



«RIT»

Foja: 1

de 1984, solicitando una indemnización ascendente a \$300.000.000.- por concepto de daño moral, o lo que el Tribunal estime pertinente.

OCTAVO.- Que, con la copia del instrumento denominado “Extracto de la Nómina de personas reconocidas como víctimas”, realizada por la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, se tiene por acreditado que la demandante doña Margarita de La Cruz Espinoza Silva, posee la calidad de víctima de violación a los derechos humanos, figurando bajo el número 340.

NOVENO.- Que, previo a abordar el análisis del fondo de la controversia planteada en autos, se analizará separadamente cada una de las excepciones opuestas por la demandada.

DÉCIMO.- Que, sobre la excepción alegada por el Fisco de reparación integral por haber sido ya indemnizados los demandantes, fundándose en la documental aparejada por el Fisco de Chile, que da cuenta de las reparaciones de los perjuicios efectuadas por diversos instrumentos (Ley N°19.992.- y Ley N°20.874.-), como así también menciona diversas obras de carácter simbólico y los programas de reparación, al respecto, es un hecho evidente que el Estado de Chile cometió violaciones a los derechos humanos durante el período comprendido entre septiembre de 1973 a marzo de 1990, cuyas víctimas son beneficiarias de los mecanismos tendientes a su reparación establecidos en la Ley N°19.992.-, que estableció una pensión de reparación y otros beneficios a su favor, ampliada posteriormente por el aporte único, de carácter reparatorio, a las víctimas de prisión política y tortura, de la Ley N°20.874.-, de lo que se concluye que el Estado de Chile, demandado en autos, ha reconocido en forma voluntaria y tácita, mediante la dictación de dichos cuerpos legales, su obligación de reparar el mal causado a las víctimas de la violencia estatal y sus familiares expresados en tales leyes, cobrando, entonces, aplicación a su respecto la regla de *onus probandi* consagrada en el artículo 1698 del Código Civil, en el sentido que quien alega la extinción de una obligación, se encuentra en la necesidad de acreditar dicha circunstancia, y, siendo el pago alegado por el Fisco ya que, desde un punto de vista sustantivo, esta es la finalidad de la “reparación



«RIT»

Foja: 1

integral” cuya existencia sostiene- un modo de extinguir las obligaciones, consagrado como tal en el artículo 1567 N° 1 del Código Civil, corresponde al Fisco probar la efectividad de encontrarse extinguida su obligación, sea a través del pago o de algún otro modo de extinguir las obligaciones, con el objeto de enervar la pretensión contraria.

Sin embargo, de las probanzas incorporadas legalmente al pleito, no se desprenden elementos de convicción que permitan establecer suficientemente la efectividad de haberse extinguido la obligación reparatoria en cuestión, en lo referido, particularmente, a la demandante de este juicio.

A mayor abundamiento, la mentada Ley N° N°19.992.-, prescribió en su artículo 1º, lo siguiente: *“Establécese una pensión anual de reparación en beneficio de las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos individualizadas en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados”, de la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas, que forma parte del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por el decreto supremo N°1.040, de 2003, del Ministerio del Interior.”*

Así también, se dispuso en el artículo 4º del mismo texto legal, que: *“Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 2º de la presente ley, la pensión otorgada por esta ley será compatible con cualquiera otra, de cualquier carácter, de que goce o que pudiere corresponder al respectivo beneficiario, incluidas las pensiones asistenciales del decreto ley N° 869, de 1975.*

Será, asimismo, compatible con cualquier otro beneficio de seguridad social establecido en las leyes.”

Que, conforme el mensaje presidencial de dicha normativa (N°203-352), de fecha 10 de Diciembre de 2004, se desprende lo siguiente: *“Y en este sentido, comparto las tres líneas de reparación que presenta la Comisión. En primer lugar dice que tienen que haber medidas institucionales, las cuales tienen que cristalizar en la creación de un Instituto Nacional de Derechos Humanos que promoverá, a través de la educación,*



«RIT»

Foja: 1

el respeto a dichos derechos y a la vez se hará cargo del patrimonio y la confidencialidad de la información acumulada en Chile, desde los archivos de la Vicaría de la Solidaridad hasta el trabajo de esta Comisión.

En segundo lugar, dice que tienen que haber medidas simbólicas y colectivas que deberán expresar el reconocimiento moral del Estado y la sociedad hacia las víctimas, como asimismo medidas jurídicas que prevengan a las actuales y futuras generaciones de esta terrible experiencia. Estas medidas, por cierto, y esto es muy importante, no deben producir afrenta alguna a las Fuerzas Armadas, pues ellas son instituciones permanentes de la República y pertenecen a todos los chilenos.

En tercer lugar, tienen que haber medidas de reparación individuales, que se expresan tanto en el ámbito jurídico como en el económico.

Las jurídicas, básicamente se refieren a cómo restablecemos la honra de estas personas. La mayor parte de las veces fueron acusadas de delitos que nunca cometieron, y por tanto, el restablecimiento pleno de sus derechos ciudadanos.

En el ámbito económico, lo he dicho antes, es imposible reparar daños físicos y espirituales que han marcado la vida de tantos compatriotas. Creo que sería una falta de respeto hacia las víctimas el que este valioso proceso de regeneración moral derivara en una pura discusión sobre dineros.

No obstante, considero que el Estado ya hizo un esfuerzo respecto de los familiares de los ejecutados y desaparecidos, respecto de quienes sufrieron el exilio, respecto de quienes fueron exonerados de sus trabajos por razones políticas. Debe entonces ahora el Estado entregar una compensación que, aunque sea austera, es una forma de reconocer su responsabilidad en lo ocurrido”.

DÉCIMO PRIMERO.- Que, en ese mismo sentido, cabe estar al decreto supremo N°1040, publicado en el Diario Oficial de 11 de noviembre de 2003, que creó la “Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, para el esclarecimiento de la verdad acerca de las violaciones de



Foja: 1

derechos humanos en Chile”, de cuyo informe se proponen, entre otras, una serie de medidas divididas en tres categorías: aquellas individuales, dirigidas a las víctimas, que intentan reparar el daño ocasionado; las colectivas, de carácter simbólico, que tienen un mayor efecto sobre la percepción actual y futura de lo sucedido y del juicio social, que buscan garantizar que no se vuelvan a producir hechos de la gravedad que se han documentado; y aquellas referidas a la institucionalidad, para asegurar la puesta en práctica de las medidas, así como la vigencia de los derechos humanos en la convivencia futura de la nación.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que, por su parte, la Ley N°20.874.-, en su artículo 1°, estableció que el aporte único entregado por esta normativa tiene el carácter de una reparación “parcial”.

DÉCIMO TERCERO.- Que, por lo demás, en dicho orden de ideas, uno de los requisitos del pago (que es la finalidad a la cual se dirige sustancialmente la “reparación integral” alegada por la demandada), como modo de extinguir obligaciones, consiste en la integridad del mismo, exigencia que, en concepto de este Tribunal, no se cumple en la especie, en atención a lo establecido en el artículo 63.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que obliga al pago de una indemnización justa a la parte lesionada, es decir, a cada persona en especial, y, en comparación, a los mecanismos e instrumentos legales de reparación invocados por la demandada no se ajustan a la norma internacional referida, la cual, de acuerdo a lo establecido en el inciso 2° del artículo 5 de la Constitución Política de nuestra República, debe ser cumplida por el Estado de Chile, so pena de comprometer su responsabilidad internacional.

A mayor abundamiento, la Excma. Corte Suprema ha declarado, en un pleito análogo, que “la legislación nacional especial que aduce el Fisco y que sólo introduce un régimen de pensiones asistenciales, no contiene incompatibilidad alguna con las indemnizaciones que aquí se persiguen, ni se ha demostrado que haya sido diseñada para cubrir toda merma moral inferida a las víctimas de atentados a los derechos humanos, puesto que se trata de modalidades diferentes de compensación, lo que hace que el hecho



«RIT»

Foja: 1

que las asuma el Estado voluntariamente no implica la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el régimen jurisdiccional declare su procedencia, por los medios que franquea la ley” (Considerando 13° de la sentencia dictada por el Máximo Tribunal el 29 de marzo de 2016, en el Rol N°2289-2015).

DÉCIMO CUARTO.- Que, en consecuencia, en virtud de lo razonado en el apartado precedente, corresponderá desestimar la excepción de reparación integral, opuesta por la parte demandada.

DÉCIMO QUINTO.- Que, por otra parte, el Fisco alega la prescripción de la acción, de 4 años contemplada en el artículo 2332 del Código Civil y, en subsidio, de 5 años establecida en el artículo 2515 del mismo Cuerpo de leyes.

Que, luego y de acuerdo a lo debatido por las partes, procede dilucidar si corresponde o no considerar un estatuto de imprescriptibilidad integral aplicable no sólo al ámbito de la responsabilidad penal, sino también extensivo al ámbito civil de las indemnizaciones en materia de crímenes de lesa humanidad o si, por el contrario, procede restringir la imprescriptibilidad sólo a las acciones penales, debiendo en consecuencia aplicarse a las acciones civiles la prescripción conforme la regulación del Derecho Privado.

Al efecto, ha de señalarse que en la especie, no se trata de una acción de naturaleza meramente patrimonial, sino de una acción reparatoria en el ámbito de violación a los Derechos Humanos en crímenes de lesa humanidad, que se rige por preceptos del Derecho Internacional que consagran la imprescriptibilidad. Ello, por cuanto la fuente de la obligación de reparación del Estado se funda no sólo en la Constitución Política de la República, sino también en los principios generales del Derecho Humanitario y los Tratados Internacionales, los que deben primar por sobre las normas civilistas internas.

De otra parte, la aplicación de la prescripción del Derecho Privado en este caso lesionaría valores fundamentales, desde el punto de vista jurídico como moral, toda vez que la aludida institución constituye un amparo para



Foja: 1

el ente estatal y, por lo mismo, su aplicación en el campo del Derecho Público importaría soslayar el deber del Estado de cumplir sus fines propios, dejando en el desamparo a las personas, lo que se traduce en una negación de sus Derechos Fundamentales, tales como la vida e integridad física, precisamente por quien es el obligado a resguardarlos.

Luego, por un principio de coherencia jurídica, la imprescriptibilidad debe regir tanto en el ámbito civil, cuanto en el ámbito penal, sin que obste a ello el fallo aludido por la demandada en apoyo a su defensa, relativo al recurso de casación en el fondo conocido por el Tribunal Pleno de nuestra Excma. Corte Suprema, en conformidad al artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, pues no debe obviarse el efecto relativo de las sentencias y el hecho que, en materias tan sensibles como ésta, la jurisprudencia se torna dinámica, como se ha podido constatar en los últimos años.

Así, en diversos fallos de nuestro máximo Tribunal, se ha razonado que “... en el caso en análisis, dado el carácter de delitos de lesa humanidad de los ilícitos verificados, con la intervención de agentes del Estado amparados en un manto de impunidad tejido con recursos estatales, se debe concluir no sólo aparejada la imposibilidad de declarar la prescripción de la acción penal que de ellos emana sino que, además, la inviabilidad de proclamar la extinción -por el transcurso del tiempo- de la posibilidad de ejercer la acción civil indemnizatoria derivada de los delitos que se han tenido por acreditados. Tratándose de delitos como los que aquí se han investigado, que merecen la calificación ya señalada, si la acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por el ordenamiento internacional sobre Derechos Humanos -integrante del sistema jurídico nacional por disposición del artículo 5° de la Carta Fundamental- que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito” (Sentencia de Reemplazo ROL ICS 5831-2013).



«RIT»

Foja: 1

Todas estas reflexiones conducen al rechazo de la excepción de prescripción enarbolada por la demandada.

DÉCIMO SEXTO.- Que, descartadas las alegaciones previas de la demandada, en relación a las pretensiones del actor, corresponde determinar si concurren los presupuestos que hacen procedente la indemnización de perjuicios reclamada.

Que, los hechos sufridos por la demandante conducen a establecer la responsabilidad del Estado en la detención ilegal y apremios ilegítimos sufridos por estos, lo que fluye de los acontecimientos descritos y de la intervención de sus agentes en los referidos hechos, considerando en particular lo dispuesto en la Carta de las Naciones Unidas que contiene entre sus propósitos y principios, el respeto a los Derechos Humanos y a las Libertades Fundamentales de todos, tema recurrente en sus objetivos y que ha sido reiterado en posteriores Tratados Internacionales.

Luego, tratándose en la especie de una violación a los derechos humanos debemos acudir también a la Convención Americana de Derechos Humanos, que en sus artículos 1.1 y 63.1 señala que cuando ha existido una violación a los derechos humanos surge para el Estado infractor la obligación de reparar con el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

De acuerdo con lo que dispone el inciso segundo del aludido precepto, los derechos humanos asegurados en un tratado se incorporan al ordenamiento jurídico interno, por lo cual ningún órgano del Estado puede desconocerlos, por el contrario debe respetarlos y promoverlos. Dicha obligación también deriva de los Tratados Internacionales como del Convenio de Ginebra de 1949, que establece el deber de los Estados parte de respetar y hacer respetar el derecho el Derecho Internacional Humanitario.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que, establecida la responsabilidad del Estado, procede ahora determinar la existencia del daño que reclama la actora.



Foja: 1

Que, cabe reiterar que la actora demanda indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido, con ocasión de la detención ilegal, apremios ilegítimos y torturas de que fue objeto el día 11 de septiembre de 1973, el día 22 de julio de 1974 y en el mes de junio de 1984, y ulteriores seguimientos y hostigamientos durante el año 1988, todo por parte de agentes del Estado, hecho indiscutido y no desconocido por la demandada, siendo incluso calificada como víctima en la nómina de personas reconocidas como víctimas en etapa de reconsideración por la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (Valech).

Ha de señalarse que para que surja la obligación de indemnizar los perjuicios, y pese a la particular naturaleza del daño moral, éste debe ser probado por quien lo reclama, toda vez que constituye un presupuesto para el origen de la responsabilidad civil.

Así la indemnización del daño moral requiere que el mismo sea cierto, vale decir, que sea real y no hipotético, el que deberá ser demostrado por los medios de prueba legalmente establecidos por nuestro ordenamiento jurídico.

El daño moral consiste, equivale y tiene su fundamento en el sufrimiento, dolor o molestia que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física o en los sentimientos o afectos de una persona. Se toma el término dolor en un sentido amplio, comprensivo del miedo, la emoción, la vergüenza, la pena física o moral ocasionado por el hecho dañoso.

También puede ser entendido, tal como lo hace el profesor René Abeliuk Manasevich como un menoscabo de un bien no patrimonial, en cuanto dolor, pesar, angustia y molestias psíquicas que sufre una persona en sus sentimientos, consecuencias del hecho ilícito; un hecho externo que afecta la integridad física o moral del individuo.

El daño moral consiste en la lesión a los intereses “extrapatrimoniales de la víctima, que son aquellos que afectan a la persona y lo que tiene la persona pero que es insustituible por un valor en moneda, desde que no se puede medir con ese elemento de cambio” (José Luis Díez Schwerter. El daño extracontractual. Editorial jurídica de Chile, pág. 88).



DÉCIMO OCTAVO.- Que, siendo un hecho de la causa que la actora doña Margarita de La Cruz Espinoza Silva tiene la calidad de víctima de torturas, forzoso resulta concluir que en virtud de principios internacionales en materia de marras, los derechos que le fueran conculcados en el contexto de autos constituyen por sí solos un daño moral que debe ser compensado por el Fisco de Chile. Esto último aparece ratificado en el instrumento citado en el considerando octavo de esta sentencia, en cuyo texto reza que *“La Comisión ha reconocido la condición de víctima de prisión por razones políticas y de tortura a través de un proceso colegiado de evaluación de los antecedentes de cada caso en particular, dirigido a la identificación de elementos de juicio objetivos, que permitieran formarse convicción moral sobre dicha condición”*.

DÉCIMO NOVENO.- Que, en orden a acreditar la existencia y evaluación del daño moral, la parte demandante acompañó un informe Psicológico de la actora, realizado por la psicóloga Carolina Canales Cortés, concluyendo que presenta trastorno de estrés post traumático de carácter grave, daños, secuelas psicológicas, y alteraciones en su salud mental, manifiesta tristeza y sentimientos depresivos que reaparecen a propósito de fechas significativas asociadas con estos sucesos, además padece trastornos del sueño e insomnios crónicos, producto de los acontecimientos que debió enfrentar como víctima de prisión política y tortura durante la dictadura militar chilena, periodo 1973 a 1990.

VIGÉSIMO.- Que, en la determinación del quantum de la indemnización, y conforme lo establecido precedentemente, el Tribunal lo calculará y cuantificará, como se dijo, prudencialmente, atendido el mérito de los antecedentes que obran en el proceso, conforme a criterios de justicia y equidad, y teniendo especialmente presente la suma que se le ha pagado a la actora por concepto de pensión de reparación dispuesta en la **Ley N°19.992.-** para víctimas de Derechos Humanos y Violencia Política y el aporte único de la **Ley N°20.874.-**.

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que, en consecuencia se fijará a título de indemnización de perjuicios por daño moral, estimando que el Estado



«RIT»

Foja: 1

deberá pagar la suma de \$10.000.000.- (diez millones de pesos) a la demandante.

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que, al haberse determinado en esta sentencia la indemnización que debe satisfacer la demandada, las sumas reguladas se reajustarán conforme la variación del Índice de Precios al Consumidor, más intereses corrientes para operaciones de crédito reajustables en moneda nacional, desde la fecha en que esta sentencia se encuentre firme o ejecutoriada, hasta la época de su pago efectivo.

VIGÉSIMO TERCERO.- Que, atendido lo dispuesto por el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, no habiendo resultado totalmente vencida y estimando esta magistrado que la demandada ha litigado con motivo plausible, se le eximirá del pago de las costas de la causa.

VIGÉSIMO CUARTO.- Que, el resto de la prueba rendida en nada altera, modifica o cambia lo resuelto en esta sentencia.

Por estas consideraciones y, de conformidad, con lo que establecen los artículos 160, 170, 748 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; artículo 48 del Código Orgánico de Tribunales; artículos 2332, 2497, 2514 y 2515 del Código Civil del Código Civil; artículos 144, 160, 170, 262 y siguientes, 309 y siguientes, 318 y siguientes, 327 y siguientes, 341 y siguientes, 432, 433, y 748 y siguientes del Código Civil; artículo 4 de la Ley N° 18.575, Ley N° 19.992, Ley N° 20.874, Constitución Política de la República; Convención Americana de Derecho Humanos; Convenio de Ginebra de 1949, SE RESUELVE:

I.- Que, se rechazan las excepciones de reparación integral y de prescripción deducidas por el **FISCO DE CHILE**;

II.- Que, se desestiman las restantes alegaciones de la demandada, opuestas en la contestación;

III.- Que, se acoge parcialmente la demanda y, en consecuencia, se condena al Fisco de Chile a pagar a la demandante doña **MARGARITA DE LA CRUZ ESPINOZA SILVA**, a título de indemnización de



«RIT»

Foja: 1

perjuicios por daño moral, la suma de **\$10.000.000.-** (diez millones de pesos), con los reajustes e intereses consignados en el fundamento vigésimo segundo precedente;

IV.- Que, se exime del pago de las costas a la demandada.

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

Consúltese si no se apelar.

Rol N° C-18.656-2020.

**PRONUNCIADA POR DOÑA PATRICIA CASTRO PARDO,
JUEZ TITULAR.**

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, veintiocho de Noviembre de dos mil veintidós**



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.

A contar del 11 de septiembre de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>